



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENA, CUND.

Tena, Cundinamarca; seis (6) de septiembre de dos veintidós (2022)

Referencia: Proceso Especial de imposición de Servidumbre.
Radicación: 2020-00069
Demandante: Transmisora Colombiana de Energía S.A.S ESP
Demandado: Alida Piñeros Camacho y otros
Asunto: Resuelve una Nulidad.

ASUNTO A DECIDIR

Procede el despacho a pronunciarse sobre la solicitud de nulidad deprecada por los abogados ORLANDO NIÑO ACOSTA en representación del señor RICARDO PIÑEROS CAMACHO y el doctor OSWALDO ROJAS CHAVEZ quien representa los intereses de la señora ALIDA PIÑEROS CAMACHO, a voces del numeral 4º del art 133 del C.G.P.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS INCIDENTANTES

Los profesionales de derecho realizan su solicitud en el mismo sentido. Piden se decrete la nulidad de todo lo actuado al considerar que se configura la causal invocada por cuanto la empresa Transmisora Colombiana de Energía SAS, no acreditó ser la propietaria del proyecto, como tampoco la entidad que adoptó y ordenó su ejecución, siendo respectivamente el Ministerio de Minas y Energía y la UPME.

Indican que por lo anterior, opera en el presente asunto la indebida representación de la demandante frente al interés que aquella invoca y por las previsiones del artículo 27 de la Ley 56 de 1981, lo que en su sentir configura entre otras causas una falta de legitimación en la causa por activa, aspecto no se puede alegar por vía de excepción toda vez que en este tipo de procesos no se admite, por ello solicitan se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda inclusive.

El doctor Oswaldo Rojas Chavez agrega que adicionalmente, la Ley 142 de 1994 reglamenta la prestación de servicios públicos domiciliarios y en el presente caso se trata de una línea de alta tensión que no corresponde a un servicio público tal como lo establece el art. 1º de la citada ley.

ARGUMENTOS DE LAS SOLICITUDES

El doctor ORLANDO NIÑO ACOSTA señala que para el presente caso quien tiene la calidad de demandante es la entidad pública que adoptó y ordenó la ejecución del

proyecto, es decir la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante UPME), entidad delegada para las gestiones administrativas de selección de proponentes para el proyecto de expansión de transmisión del Sistema de Interconectado Nacional, en consecuencia, quien funge como demandante no es la entidad que adoptó u ordenó la ejecución del proyecto.

Indica que en materia de imposición de servidumbres el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1073 de 2015 que compila la normatividad del sector energético, norma que en su art. 2.2.3.7.5.1 indica que esta clase de procesos serán promovidos en calidad de demandante por la entidad de derecho público que haya adoptado el proyecto y ordenado su ejecución. Que con tal fin solicitó a la UPME informara cuál fue la entidad que adoptó y ordenó la ejecución del proyecto a que refiere la demanda, dejando claro la citada entidad que el Ministerio de Minas y Energía adoptó el proyecto y que su ejecución en la parte administrativa lo delegó a la UPME.

Que dicha entidad según el art. 1.2.1.1.7 ib. tiene por objeto planear con agentes del sector minero energético el desarrollo y aprovechamiento de los recursos de ese sector y frente a su naturaleza jurídica cita el art. 1º del Decreto 1258 de 2013.

Por lo anterior y en su sentir, la entidad demandante no tiene la capacidad para ser parte dentro del proceso y si bien no hay duda frente a su representación legal, no ostenta la calidad de demandante, configurándose en consecuencia la nulidad por él planteada, citando al respecto el art. 27 de la Ley 56 de 1981.

Bajo los anteriores planteamientos solicita se decrete la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda inclusive, disponiéndose su rechazo por indebida representación del demandante frente a la calidad que exige la ley vigente para estos asuntos.

Por su parte el doctor OSWALDO ROJAS CHAVEZ depreca nulidad a voces del numeral 4º del artículo 133 del C G P.

Argumenta su petición señalando que la Empresa Transmisora Colombiana de Energía SAS acude en calidad de demandante en el presente proceso cuando el proyecto que realiza fue presentado por el Ministerio de Minas y Energía a través de la UPME, entidad que mediante convocatoria pública UPME-07-2016 escogió las empresas que ejecutarían el proyecto propuesto en el Plan de expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional, por tanto la demandante no es la entidad que adoptó u ordenó la ejecución del proyecto.

Al igual que su homólogo cita los Decretos 1073 de 2015, artículos 2.2.3.7.5.1 procesos judiciales, 1.2.1.1.7 objeto de la UPME, artículo 1º del Decreto 1258 de 2013, naturaleza jurídica de la UPME, artículo 27 de la Ley 56 de 1981, señalando al respecto que de las normas citadas concluye que la Empresa Transmisora Colombiana

de Energía SAS no tiene capacidad para ser parte en el proceso, por tanto considera se configura la causal de nulidad que impetra.

Adicionalmente señala que la Ley 142 de 1994 reglamenta la prestación de servicios públicos domiciliarios y en el presente caso se trata de una línea de alta tensión de 500 kv, que en su entender no es un servicio público como lo establece el art. 1º de la mencionada ley, misma que en el su art. 2º estipula que es el Estado quien debe intervenir en estos procesos.

Bajo los anteriores argumentos solicita la nulidad de la actuado inclusive del auto que admite la demanda y en consecuencia el rechazo de la misma por indebida representación del demandante, además que se le condene en costas y agencias en derecho.

LA DEMANDANTE

De las anteriores solicitudes se corrió traslado a la demandante Trasmisora Colombiana de Energía S.A.S. E.S.P., quien conforme lo establecido en el art. 110 del C G P manifestó lo siguiente:

El primer lugar expone las características de la UPME, citando sus funciones contenidas en el art. 16 de la Ley 143. A continuación, indica que en desarrollo de esas funciones y en cumplimiento del art. 8º de la resolución 181313 del Ministerio de Minas y Energía que instituyó los criterios para la elaboración del Plan de Expansión del Sistema de Interconectado Nacional, se estableció que las obras deben ser ejecutadas por inversionistas seleccionados a través de convocatoria pública, transcribiendo la norma citada.

Que de conformidad con la Ley 142 de 1994 las redes de transmisión y sus obras de expansión son consideradas parte del servicio público domiciliario de energía eléctrica, de utilidad pública e interés social y por ello las Empresas de Servicios Públicos se encargan de la ejecución, operación y mantenimiento de las obras, en ese sentido el inversionista T.C.E se encarga entre otros de la gestión predial que concierne al proceso de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica con ocupación permanente, citando el art. 7 de la Ley 143 de 1994.

Que en consideración a los cambios introducidos al sector de servicios públicos por las Leyes 142 y 143 de 1994 se permiten la participación privada para el desarrollo de sus actividades, cobijándolas con todas las facultades para la prestación de los servicios públicos entre ellos la imposición de servidumbre regulada por la Ley 56 de 1981.

A continuación informa sobre la creación, naturaleza y objeto social de TCE S.A.S E.S.P., indicando que según los documentos de selección del inversionista DSI de la

convocatoria pública UPME07-2016 establecen en los numerales 2.1 y 3 el objeto del proyecto, estableciendo las labores que el inversionista seleccionado debe ejecutar. Dentro de la pre construcción de las obras se encuentra la servidumbre, además que el inversionista adjudicado ejecutará el proyecto a su cuenta y riesgo el que no será asumido ni por el MME ni pro la UPME. Por lo anterior, la TCE como inversionista seleccionado es la encargada de adelantar las actividades necesarias para la ejecución de la Línea de Trasmisión Nueva Esperanza- La Virginia, entre las que se encuentran gestionar las servidumbres requeridas para el desarrollo del proyecto.

Bajo los anteriores argumentos considera que la empresa Trasmisora Colombiana de Energía Eléctrica S.A.S. E.S.P., está facultada para adelantar el proyecto UPME 07 de 2016 y en consecuencia legitimada en la causa por activa para adelantar el proceso de imposición de servidumbre de energía eléctrica, por lo que solicita negar las nulidades impetradas.

CONSIDERACIONES:

Sea del caso señalar que el presente rito (incidente de nulidad) en materia procesal, persigue como finalidad esencial que el funcionario de instancia tome los correctivos consagrados en la Ley, encaminados a subsanar las deficiencias en que se hubiere podido incurrir en el trámite del respectivo proceso, o el que se le haya hecho incurrir por la parte, todo con el fin exclusivo de garantizar los derechos a un debido proceso y de defensa, principios consagrados en el artículo 29 de la Carta Fundamental.

Ahora bien, en tratándose de nulidades, opera el principio de taxatividad, lo cual implica que solo es posible alegar las causales de nulidad consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso, lógicamente con la general plasmada en el artículo 29 de la Carta Magna.

El despacho resolverá la nulidad planteada por el memorialista previas las siguientes consideraciones de orden factico y jurídico.

El artículo 133 del C.G.P. dispone lo siguiente:

Artículo 133. *Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos*

(..) art 4 Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

Afirman los incidentalistas, que en este caso se incurrió en la causal invocada, ya que Transmisora Colombiana de Energía S.A.S. E.S.P., no acreditó ser la propietaria

del proyecto, y menos aún quien adoptó y ordenó el proyecto UPME 07 de 2016 , por lo que hay una indebida representación de la parte en el proceso.

Frente a la nulidad planteada, este despacho entrara a resolver si les asiste razón o no a los señores apoderados de la parte pasiva veamos:

Se tiene que a partir de la Constitución Política de 1991 se definió que "los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es su deber asegurar su prestación eficiente"¹. Con fundamento en este postulado constitucional, se expidieron las Leyes 142 de 1994² y 143 de 1994³, que han definido los criterios y principios generales que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país, además de los procedimientos y mecanismos para su regulación, control y vigilancia.

Taxativamente, y para el caso que nos ocupa, la Ley 143 estableció el régimen para las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, creó las reglas de mercado y competencia y estableció las funciones de cada institución. Asimismo, la citada ley cambió el rol del Estado en materia de inversión, dejando en cabeza de las empresas el desarrollo de la infraestructura energética.

La institucionalidad actual asignó al Ministerio de Minas y Energía el papel de ente rector del sector energético y de formulador de las políticas sectoriales. En este sentido es quien orienta la gestión de los organismos y entidades adscritas o vinculadas.

Es así que en desarrollo de esa política sectorial, el Min-Minas, creo la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME⁴, cuya función principal es realizar el planeamiento energético integral, además de asesorar y servir de soporte al Min. Minas en la promulgación de políticas que atañen el sector energético; dicha UPME se encarga de elaborar cada año el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión en donde se definen las obras que se deben acometer a nivel del STN⁵ y estructurar los procesos de convocatoria pública y selección de los inversionistas que se encargarán de realizar y ejecutar dichas obras.

Con fundamento en dicha función, es así que la UPME, en atención al proyecto UPME-07-2016 Línea de Transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 KV, a través

¹ Art 365 Cost.Polit.

² Ley de servicios públicos

³ Ley eléctrica

⁴ Decreto 2119 de 1992

⁵ Sistema de Transmisión Nacional

del mecanismo de convocatoria pública, el 22 de noviembre de 2016, adjudicó el proyecto a la empresa ALUPAR COLOMBIA SAS, quien posteriormente conformó la Empresa de Servicios Públicos Transmisora Colombiana de Energía S.A.S, (en adelante TCE) para efectos de la ejecución del proyecto; por lo tanto, TCE, como inversionista seleccionado en dicha convocatoria, es la encargada de adelantar todas las actividades necesarias para diseño, construcción de las obras, gestión y/o de las servidumbres públicas de conducción eléctrica que sean requeridas para el proyecto, estudios, contratos de conexión, licencias ambientales y demás permisos, entre otros.

Por lo anterior, y con fundamento en la ley 142 de 1994 en concordancia con el art. 25 de la ley 56 de 1981, que regula el procedimiento para la constitución de servidumbres públicas de conducción de energía eléctrica, la legitimidad para actuar en estos procesos corresponde a las entidades (Públicas o privadas a quien se les haya adjudicado el proyecto) que tienen a su cargo la construcción de centrales generadoras, líneas de interconexión, transmisión y prestación del servicio público de energía eléctrica, entidades que adoptarán y ejecutaran el respectivo proyecto, el cual contemplará el trazado de la servidumbre correspondiente.

En el presente asunto y conforme a la convocatoria realizada por la UPME, la Empresa de Servicios Públicos Transmisora Colombiana de Energía S.A.S⁶. es la entidad a la que se le adjudicó el proyecto, teniendo a cargo su ejecución, con las facultades conferidas tanto por las normas aquí citadas como por el DSI de la convocatoria pública UPME 07-2016, por tanto, T.C.E S.A.S. E.P.S, es quien debe promover, en calidad de demandante, el proceso para la constitución de la servidumbre.

Finalmente, y con relación a lo señalado por los incidentantes respecto a que la labor que se adelanta con el proyecto que ejecuta la empresa TCE no corresponde a la prestación de un servicio público domiciliario al tratarse de la instalación de líneas de alta tensión, de conformidad con lo establecido en el art. 1º de la Ley 142 de 1994, es necesario precisar lo siguiente:

Sea lo primero indicar que según la definición que aparecen en diferentes diccionarios, el sistema eléctrico es el conjunto de instalaciones, conductores y equipos necesarios para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Se divide en tres subsistemas principales: generación, transporte y distribución. El sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía

⁶ Acta de adjudicación UPME 07-2016 Folio 20-23 cuaderno principal.

eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección.

De otra parte, es la misma norma citada por el peticionario, la que en su art. 14.25 señala:

"14.25. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de transformación, interconexión y transmisión." (subrayas del despacho)

Frente al tema, el Consejo de Estado refirió:⁷

"... el servicio público domiciliario de energía eléctrica bajo la óptica del numeral 25 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 se entiende como el transporte de energía eléctrica que va desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida la conexión y medición respectiva. De otra parte, el régimen de los servicios públicos domiciliarios permite la expropiación de inmuebles o la imposición de servidumbres para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos."

Y más adelante señaló:

"El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución N° 180398 de 2004 modificada por la Resolución N° 180498 del 25 de abril de 2005, mediante la cual estableció el reglamento técnico de instalaciones eléctricas -RETIE- y entró en vigencia a partir del 1 de mayo de 2004. En el mencionado reglamento se fijan las condiciones técnicas mínimas que propenden por garantizar la seguridad en los procesos de generación, transmisión transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en el territorio colombiano. Los requisitos técnicos que establece el reglamento técnico de instalaciones eléctricas -RETIE- es de obligatorio cumplimiento para todas las instalaciones nuevas de corriente alterna o continua, bien sean públicas o privadas, cuyo valor de tensión nominal sea igual o mayor a 25 V e igual o menor a 500 kv de corriente alterna con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz y mayor o igual a 50 V en corriente continua."

Bajo tal rasero, queda claro para el despacho que las instalaciones de las líneas de alta tensión forman parte del proyecto para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, ya que el suministro de electricidad es el proceso que va desde la generación de electricidad en la central eléctrica hasta llegar al uso del consumidor.

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P.: Rafael E. Ostau De Lafont
12 de noviembre de 2009. Radicado 18001-23-31-000-2004-00408-01

Bastan los anteriores planteamientos para denegar la solicitud de nulidad deprecada por los apoderados de los demandados, a no configurarse la causal por ellos fundamentada.

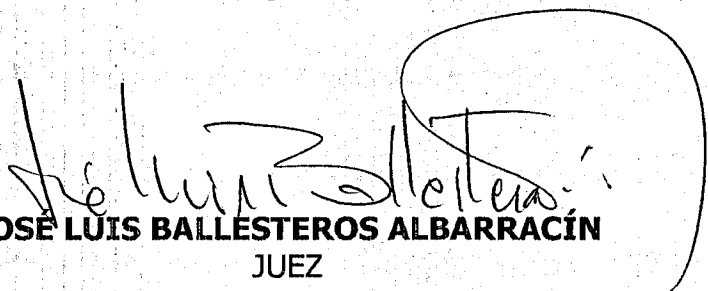
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tena Cundinamarca,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la NULIDAD planteada por los señores apoderados de la parte demandada, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente decisión, pasen las diligencias al despacho para continuar con el trámite del proceso.

NOTIFIQUES y CUMPLASE


JOSE LUIS BALLESTEROS ALBARRACÍN
JUEZ

JUZGADO PROMISCO MUICIPAL
TENA, CUNDINAMARCA

La providencia anterior se notificó a las partes por anotación
en el Estado No 52, de fecha 7 de septiembre de 2022.

La secretaria:


SANDRA PATRICIA INFANTE SANTANA